

VICTOR MANUEL TINOCO RUBI, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, a todos sus habitantes hace saber:
El H. Congreso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO:
EL CONGRESO DE MICHOACAN DE OCAMPO
DECRETA:
NUMERO 166

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Capítulo I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.

Esta ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control que, en materia de adquisiciones, contratación, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios relacionados con los mismos realicen:

- I.- El Poder Ejecutivo del Estado, a través de su titular o de las dependencias que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal;
- II.- Los organismos públicos descentralizados del Estado;
- III.- Las empresas de participación estatal mayoritaria; y,
- IV.- Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado a través del Titular (sic) del Poder Ejecutivo o de las dependencias o entidades de la Administración Pública.

Artículo 2º

Estarán sujetos a las disposiciones de esta ley, las adquisiciones, arrendamientos o servicios que contraten los ayuntamientos cuando se realicen con cargo a fondos estatales, conforme a los convenios que se celebren con el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Artículo 3º

El gasto de las adquisiciones, los arrendamientos y los servicios, se sujetará a lo que establezca el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.

No se podrá realizar ninguna operación en las materias que regula esta ley, si no hubiere saldo disponible en la partida presupuestal correspondiente.

Capítulo II

DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 4º

Se crea el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El Comité tendrá su domicilio en la ciudad de Morelia, Michoacán, y contará con la estructura administrativa y el personal necesario para el desempeño de sus atribuciones.

Artículo 5º

El Comité será el organismo encargado de definir, conducir y aplicar los lineamientos en materia de adquisiciones, contratos y arrendamientos a que se refiere el artículo 1º., de esta ley.

Artículo 6º

El Comité tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Fijar las normas conforme a las cuales se deberán conducir las dependencias y entidades al adquirir las mercancías, materias primas y contratar servicios y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, que requieran para el cumplimiento de sus atribuciones;

II.- Establecer las bases para contratar en arrendamiento los bienes muebles e inmuebles que se requieran, cualquiera que sea la modalidad y forma que se adopte;

III.- Establecer las bases y normas generales para la celebración de concursos y licitaciones, a efecto de adquirir mercancías, materias primas y bienes muebles;

IV.- Aprobar los formatos para documentar los pedidos o contratos de adquisición de mercancías, materias primas, bienes muebles e inmuebles;

V.- A solicitud de los ayuntamientos, asesorarlos en la negociación de adquisiciones de bienes muebles e inmueble (sic) y en la contratación de servicios relacionados con éstos;

VI.- Revisar los sistemas de adquisición y establecer las medidas pertinentes para mejorarlos;

VII.- Determinar los bienes de uso generalizado que se contratarán en forma consolidada, con el objeto de que se obtengan las mejores condiciones en cuanto a precio y oportunidad; así como determinar la dependencia que llevará a cabo dichas contrataciones;

VIII.- Dictaminar sobre la procedencia de celebrar licitaciones públicas, así como los casos en que no se celebren, por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en la legislación aplicable;

IX.- Registrar las operaciones que se realicen en las materias previstas en el artículo 1º., de esta ley;

X.- Revisar y aprobar, en su caso, los programas y planes de trabajo necesarios para el cumplimiento de los fines y funciones del organismo, que le sean presentados por el Director General;

XI.- Revisar y aprobar, en su caso, los lineamientos, normas y políticas que en relación con las acciones en materia de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, proponga el Director General;

XII.- Analizar y aprobar, en su caso, los informes que le rinda el Director General;

XIII.- Examinar y aprobar, en su caso, el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos que para cada ejercicio anual le presente el Director General;

XIV.- Revisar y aprobar, en su caso, los reglamentos, manuales de operación y procedimientos necesarios que el Director General someta a su consideración;

XV.- Autorizar la estructura administrativa del Comité asignando las funciones de acuerdo con las necesidades del mismo;

XVI.- Hacer cumplir lo dispuesto en esta ley y en las disposiciones que se deriven de ella; y,

XVII.- Las demás que se establezcan en otras disposiciones legales.

Artículo 7º

El patrimonio del Comité se integrará con los bienes, derechos y obligaciones que se le transmitan o que adquiriera cualquier título legal.

Artículo 8º

El Comité se integrará por:

I.- Un Director general, quien deberá ser ciudadano michoacano por nacimiento o por residencia en el Estado no menor de dos años anteriores al día de su designación, con probada capacidad y prestigio moral reconocido; el cual será nombrado por el Gobernador del Estado; y,

II.- Seis vocales que serán:

a).- El Oficial Mayor;

b).- El Tesorero General del Estado;

c).- El Coordinador de Control y Desarrollo Administrativo; y,

d).- Tres representantes ciudadanos propietarios y tres suplentes, nombrados por el Titular del Poder Ejecutivo; quienes deberán reunir los mismos requisitos que el Director General del Comité.

Los cargos que desempeñen los integrantes del Comité serán honoríficos, excepto el del Director general y el personal administrativo, quienes recibirán los emolumentos que para tal fin se autoricen.

Artículo 9º

Las resoluciones del Comité se tomarán por mayoría de votos, teniendo el Oficial Mayor voto de calidad en caso de empate.

Artículo 10

Los miembros del Comité podrán designar representantes con excepción del Director General y los representantes ciudadanos.

Artículo 11

El Comité sesionará dos veces al mes, pudiendo ser convocado por el Director General cuantas veces se requiera.

Artículo 12

El Director General, tendrá a su cargo el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Comité;

II.- Formular y proponer al Comité, los proyectos de normas que en materia de planeación, programación y control de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles, sean susceptibles de dictarse por éste;

III.- Proponer al Comité las adquisiciones de bienes de uso generalizado que sean susceptibles de adquirirse en forma consolidada;

IV.- Someter a consideración del Comité, los proyectos de formatos para documentar los pedidos o contratos para la adquisición de los bienes y servicios que regula esta ley;

V.- Solicitar a las dependencias y entidades, la presentación de proyectos, programas, presupuestos y modificaciones relativos a adquisiciones, contrataciones y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, y prestación de servicios relacionados con los mismos, para someterlos a la consideración del Comité;

VI.- Revisar los pedidos y los contratos de adquisición de mercancías, materias primas, bienes muebles e inmuebles;

- VII.- Intervenir en la recepción de los bienes, así como en la verificación de sus especificaciones, calidad y cantidad, y en su caso, oponerse a su recepción;
- VIII.- Participar en todas las adquisiciones que se hagan por parte del Poder Ejecutivo del Estado;
- IX.- Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, así como el registro de los precios e importes máximos de las mercancías, materias primas, bienes y servicios;
- X.- Solicitar a los proveedores de la Administración Pública Estatal, los precios, calidades y especificaciones de sus productos y servicios, y requerir para su comprobación, informes sobre solvencia, capacidad y abastecimiento;
- XI.- Intervenir en las licitaciones que se celebren en relación con la materia de esta ley;
- XII.- Proponer al Comité los procedimientos pertinentes para mejorar las adquisiciones, arrendamientos, y contrataciones que se celebren;
- XIII.- Representar legalmente al Comité con todas las facultades generales para pleitos y cobranzas y para actos de administración, y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, quedando también autorizado para otorgar y revocar poderes para pleitos y cobranzas. Podrá realizar actos de dominio previa autorización expresa que, en cada caso, le otorgue el Comité;
- XIV.- Someter a la aprobación del Comité los planes y programas de trabajo para cada ejercicio, y ejecutarlos en su caso;
- XV.- Ejecutar los planes y programas de trabajo, aprobados por el Comité y ejercer el presupuesto correspondiente; así como rendir informes sobre su cumplimiento y ejercicio;
- XVI.- Presentar anualmente al Comité, para su aprobación, el proyecto de ingresos y egresos del organismo;
- XVII.- Someter a la aprobación del Comité los proyectos de reglamentos del organismo;
- XVIII.- Someter a la aprobación del Comité los nombramientos del personal de confianza del organismo;
- XIX.- Nombrar y remover al personal administrativo del organismo, y señalarle las funciones que le correspondan, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
- XX.- Rendir al Comité un informe semestral sobre las actividades realizadas; y,
- XXI.- Las demás que le asigne el Comité, le confiera esta ley y otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 13

Los titulares de las dependencias y entidades, procurarán que, en la adopción y ejecución de los procedimientos que se requieran para la realización de los actos regulados por esta ley, se observen los siguientes criterios:

- I.- Promover la simplificación administrativa, y fomentar la transparencia y legalidad de los procedimientos y trámites;
- II.- Ejecutar las acciones para desconcentrar las labores que realicen con el objeto de que los trámites se lleven a cabo y se resuelvan en los lugares en que se originen los actos; y,
- III.- Racionalizar y simplificar las estructuras con que cuenten, a efecto de utilizar los recursos estrictamente indispensables para llevar a cabo sus operaciones.

La Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo vigilará y comprobará la observancia de los criterios a que se refiere este artículo; tratándose de los ayuntamientos, en lo que refiere al artículo 2º., de esta ley, esta facultad la ejercerá la Contaduría General de Glosa.

Artículo 14

El Comité podrá, en coordinación con las dependencias estatales interesadas, contratar servicios de asesoría técnica para la realización de investigaciones de mercado, el

mejoramiento del sistema de adquisiciones y arrendamientos, la verificación de precios, pruebas de calidad y otras actividades vinculadas con el objeto de esta ley.

Artículo 15

En el caso de que deba cubrirse a crédito el importe de las operaciones reguladas por esta ley, cuando para ello se comprometan recursos financieros con cargo a ejercicios futuros, será necesario obtener la autorización de la Tesorería General del Estado, y en su caso, sujetarse a lo establecido en la Ley de Deuda Pública del Estado.

Artículo 16

La Oficialía Mayor será la instancia encargada de establecer y aplicar las bases y normas que regulen los servicios de uso generalizado que, celebrados por ella en contratos de adhesión, requieran las dependencias y entidades estatales para el cumplimiento de sus funciones, así como supervisar su cumplimiento, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

Capítulo III

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Artículo 17

Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades se sujetarán a:

- I.- Las políticas, objetivos y prioridades que señale el Plan de Desarrollo Integral del Estado, y los programas sectoriales, regionales y especiales, en su caso;
- II.- Las previsiones contenidas en los programas anuales que elaboren las propias dependencias y entidades, para la ejecución del plan a que se refiere la fracción anterior;
- III.- Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado; y,
- IV.- Las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 18

Las dependencias y entidades realizarán un programa anual de sus adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, y deberán presentarlo oportunamente al Comité, considerando:

- I.- Las acciones previas, concomitantes y posteriores a la realización de dichas operaciones; los objetivos y metas a corto y mediano plazo;
- II.- La existencia en cantidad y calidad de los bienes a adquirir, los plazos estimados de suministro, los avances tecnológicos efectuados y las necesidades que se tengan;
- III.- Los requerimientos en materia de conservación, mantenimiento y ampliación de capacidad de los servicios públicos;
- IV.- Preferentemente, la utilización de los bienes y servicios de procedencia regional con especial atención a los sectores económicos cuya promoción, fomento y desarrollo estén comprendidos en los objetivos y prioridades del Plan de Desarrollo Integral del Estado; y,
- V.- De preferencia, la inclusión de insumos, material, equipo, sistemas y servicios que tengan incorporada tecnología nacional, tomando en cuenta los requerimientos técnicos y económicos de las adquisiciones o pedidos que vayan a hacerse en el país o en el extranjero.

Artículo 19

Los contratos y pedidos celebrados por las dependencias y entidades, así como toda la documentación relacionada con ellos, deberá enviarse al Comité en los plazos, formas y modalidades que éste determine.

Cuando el Comité, en la revisión del pedido o contrato, considere que el mismo no se ajusta a las prevenciones de esta ley, a las normas o bases que regulen el acto de que se trate o cualquier otra disposición aplicable, comunicará sus observaciones a la dependencia o entidad y a los proveedores, para los efectos correspondientes. En caso de incumplimiento solicitará a la dependencia o entidad de que se trate, se suspenda o cancele el contrato o pedido, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan.

Artículo 20

El Comité solicitará a la dependencia o entidad correspondiente, se exija la restitución de los pagados en exceso, la reposición de mercancías, el ajuste de precios o las correcciones necesarias, cuando:

I.- Los precios de adquisición estipulados sean superiores a los máximos registrados por el Comité;

II.- Las mercancías, materias primas, servicios, o bienes muebles e inmuebles recibidos no sean de la calidad, las especificaciones o las características pactadas; y,

III.- Los pedidos o contratos que se hayan celebrado en contravención a esta ley, a las disposiciones derivadas de ella, o las normas que expida el propio Comité.

Las resoluciones que emita el Comité, con base en este artículo, se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que procedan en contra de los responsables.

Artículo 21

El Comité podrá eximir de la obligación de inscribirse previamente en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal y de registrar los precios máximos de venta, a las personas físicas o morales que provean artículos perecederos, o cuando se trate de adquisiciones de carácter urgente, debidamente comprobado.

Artículo 22

En las adquisiciones de mercancías, materias primas, bienes muebles, se preferirá como proveedores, en igualdad de circunstancias, a las entidades públicas estatales, municipales y federales, a las empresas del sector social de la economía como son las sociedades cooperativas y las empresas ejidales y a las personas físicas o morales establecidas en el Estado.

Artículo 23

El Comité, a solicitud de la dependencia o entidad que corresponda, determinará los bienes y servicios de uso generalizado, con el objeto de lograr, en la contratación, el apoyo a las áreas prioritarias y obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad.

Capítulo IV

DEL PADRÓN DE PROVEEDORES

Artículo 24

El Comité, a través del Director General, integrará y mantendrá actualizado el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal; además, clasificará a las personas inscritas en él, de acuerdo con su actividad, capacidad técnica y demás características.

Las personas inscritas en el padrón deberán comunicar de inmediato, al Comité, las modificaciones relativas a su naturaleza jurídica, actividad, capacidad técnica y económica.

La clasificación a que se refiere este artículo, deberá ser considerada por las dependencias y entidades, en la convocatoria y formalización de las operaciones que regula esta ley.

Para los efectos de esta ley, el carácter de proveedor se adquiere con la inscripción a que se refiere este artículo; en consecuencia, las dependencias y entidades, se abstendrán de exigir a los proveedores estar inscritos en cualquier otro registro que les otorgue el mismo carácter.

Las dependencias y entidades solo podrán realizar adquisiciones o celebrar contratos con las personas inscritas en el padrón.

Artículo 25

El padrón de proveedores se formará con las personas físicas o morales que deseen enajenar mercancías, materias primas y bienes muebles, o bien arrendar o prestar servicios al Estado. Las personas físicas o morales interesadas en inscribirse en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, deberán satisfacer los siguientes requisitos:

I.- Solicitar su inscripción en los formatos que apruebe el Comité;

II.- Cuando se trate de personas morales deberán exhibir copia certificada de la escritura o acta constitutiva actualizada; y en caso de haber sido creada por disposición legal deberá indicarla. Siempre deberá acreditarse la personalidad del representante;

III.- Acreditar legalmente, que se ha dedicado por lo menos dos años antes de la solicitud de registro a la actividad que ostenta, excepto en los casos de empresas de interés social o que promuevan el desarrollo económico del Estado;

IV.- Demostrar su solvencia económica y capacidad para la producción o suministro de mercancías, materias primas, bienes muebles, y en su caso para el arrendamiento de éstos, o para la prestación de servicios;

V.- Acreditar haber cumplido con las inscripciones y registros que exijan las disposiciones de orden fiscal o administrativo;

VI.- Pagar los derechos que establezca la tarifa fijada por el Comité; y,

VII.- Proporcionar la información complementaria que exija el Comité y las normas jurídicas aplicables.

Artículo 26

El registro en el padrón tendrá una vigencia indefinida. El Comité, dentro del término de 30 días hábiles siguientes al de la presentación de la solicitud, resolverá si otorga el registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal.

Transcurrido este plazo, sin que haya respuesta, se tendrá por registrado al solicitante. Toda resolución será fundada y motivada.

Si la solicitud fuese confusa o incompleta, el Comité podrá solicitar dentro del término de 20 días hábiles siguientes a su recepción, que se aclare o complemente. Si el proveedor no presentará la información requerida dentro del plazo que se le conceda, que será de 30 días hábiles, se tendrá por no presentada la solicitud.

Artículo 27

El Comité podrá suspender el registro del proveedor cuando:

I.- Se declare en estado de suspensión de pagos o bajo un procedimiento de quiebra o, en su caso, sujeto a concurso de acreedores, de conformidad con la ley de la materia; y,

II.- Cuando el proveedor se niegue a reponer las mercancías que no reúnan los requisitos estipulados.

Cuando desaparezcan las causas que hubieren motivado la suspensión del registro, el proveedor lo acreditará ante el Comité, el que dispondrá lo conducente a fin de que el registro del interesado vuelva a surtir todos los efectos legales.

Artículo 28

El Comité podrá cancelar el registro del proveedor cuando:

I.- La información que hubiere proporcionado para la inscripción resultare falsa, o haya actuado con dolo o mala fe en la adjudicación del pedido o contrato, en su celebración o en su cumplimiento;

II.- No cumpla en sus términos con algún pedido o contrato por causas imputables a él, y perjudique con ello los intereses de la dependencia o entidad de que se trate;

III.- Incurra en actos, prácticas u omisiones que lesionen el interés general o el de la economía del Estado;

IV.- Se declare en quiebra;

V.- Haya aceptado pedidos o firmado contratos en contravención a lo establecido por esta ley, por causas que le fueren imputables; y,

VI.- Se le declare incapacitado legalmente para celebrar actos o contratos de los regulados por esta ley.

En todo caso la cancelación procederá al desaparecer jurídicamente el proveedor.

Artículo 29

Contra las resoluciones que nieguen las solicitudes de inscripción, o determinen la suspensión o cancelación del registro en el padrón, el interesado podrá interponer recurso de revocación en los términos de esta ley.

Capítulo V

DE LOS PEDIDOS Y CONTRATOS

Artículo 30

Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se adjudicarán o se llevarán a cabo a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, el que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la presente ley.

Las dependencias y entidades bajo su responsabilidad, podrán fincar o celebrar contratos sin llevar a cabo las licitaciones a que se refiere este artículo, en los supuestos que a continuación se señalan:

I.- Cuando resulte imposible la celebración de licitaciones debido a que no existan por lo menos tres proveedores idóneos, o se requiera algún bien de características y marca específicas que implique exclusividad, o el costo del bien o bienes no justifique la celebración del concurso;

II.- Cuando se trate de adquisiciones de urgencia debido a acontecimientos graves e inesperados, las cuales de no realizarse pondrían el (sic) peligro las operaciones de un programa prioritario, o acarrearían severas consecuencias para su desarrollo;

III.- Cuando el pedido o contrato sólo pueda fincarse o celebrarse con una determinada persona, por ser ésta titular de la o las patentes de los bienes o servicios de que se trate;

IV.- Cuando se refiera a adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios, básicos o semiprocesados;

V.- Cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, o cuando existan circunstancias que puedan provocar trastornos graves, pérdidas o costos adicionales importantes;

VI.- Cuando se hubiere rescindido el contrato o el pedido respectivo. En estos casos se verificará previamente, conforme al criterio de adjudicación establecido en esta ley, si existe otra proposición que resulte aceptable; en cuyo caso, el pedido o el contrato se celebrará con el proveedor que habiendo participado en la licitación que originó el contrato rescindido, resulte con la propuesta más aceptable;

VII.- Cuando sea adquisición de bienes mediante operaciones que no impliquen actos de comercio; y,

VIII.- Cuando se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios, cuya realización se contrate con indígenas, campesinos o grupos urbanos marginados y que la dependencia o entidad contrate directamente con los mismos o con las personas morales constituidas por ellos.

El Comité regulará estas excepciones procurando obtener calidad, precios adecuados y eficacia.

Artículo 31

Las convocatorias, que podrán referirse a uno o más contratos o pedidos, se publicarán en un periódico de los de mayor circulación en el Estado.

La dependencia o entidad, serán responsables de la adecuada publicidad de las convocatorias.

Artículo 32

Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley, con las personas físicas o morales siguientes.

I.- Aquellas en que el servidor público que intervenga en cualquier forma en la adjudicación del contrato tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad hasta en segundo grado, o civil, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de la que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;

II.- Los proveedores que se encuentren en situación de mora, por causas imputables a ellos mismos, respecto del cumplimiento de otro u otros pedidos o contratos; y,

III.- Los demás que por cualquier causa se encuentren impedidos para ello por disposición de la ley.

Capítulo VI

DE LA FORMACIÓN Y VERIFICACIÓN

Artículo 33

Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática, la documentación que justifique y compruebe la realización de los actos regulados por esta ley, y por cinco años, contados a partir de la fecha en que se hubieren recibido los bienes o prestado el servicio.

Artículo 34

La Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo podrá realizar visitas o inspecciones, cuando lo considere pertinente, a las dependencias y entidades que celebren actos regulados por esta ley, así como solicitar a los servidores públicos de las mismas y a los proveedores en su caso todos los datos e informes relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

Artículo 35

Las dependencias y entidades deberán proporcionar todas las facilidades necesarias a fin de que el Comité pueda realizar el seguimientos (sic) y control de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

Artículo 36

El Comité y la Oficialía Mayor, en lo que a cada uno corresponda, determinará la información que le deberán enviar las dependencias y entidades, respecto de los bienes y servicios que determina esta ley, con el fin de ejercer sus atribuciones y orientar las políticas de precios y adquisiciones de la administración pública estatal.

Los proveedores de bienes y servicios deberán informar con la debida oportunidad a las dependencias y entidades, así como al Comité y a la Oficialía Mayor, los precios vigentes para la venta de sus productos y servicios, en la forma y términos que establezca cada una de estas instituciones.

Artículo 37

Con base en el análisis y evaluación a que se refiere el artículo anterior, el Comité y la Oficialía Mayor, en la materia de su competencia, dictaminarán las circunstancias en que se hubiere celebrado la operación, en cuanto al tipo de bienes, precio, características, especificaciones, tiempo de entrega o suministro, calidad o demás condiciones, y harán las observaciones que procedan a la dependencia, entidad y al proveedor de que se trate, a efecto de que se apliquen las medidas correctivas que se requieran.

Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, se harán del conocimiento de la Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo las observaciones que se hubieren efectuado respecto de los pedidos o contratos correspondientes, para que ésta proceda conforme a sus atribuciones en los términos legales correspondientes.

Tratándose de los ayuntamientos, cuando proceda aplicar lo previsto en el presente capítulo, corresponderá a la Contaduría General de Glosa ejercer las facultades que se le confieren a la Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo, al Comité y a la oficialía Mayor.

Capítulo VII

DE LAS INFRACCIONES

Artículo 38

Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones contenidas en esta ley, serán sancionados por la Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo, por denuncia del Comité o de la Oficialía Mayor, según corresponda, de conformidad con la ley de la materia.

Los proveedores que incurran en infracciones a esta ley, serán sancionados por el Comité, con multa de cien hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Estado; suspensión o cancelación de su registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal.

Cuando el infractor de la presente ley, sea un servidor público municipal, se observará lo dispuesto en la ley de la materia.

Artículo 39

Tratándose de infracciones a la presente ley por los proveedores, el Comité o la Oficialía Mayor aplicarán la sanción correspondiente conforme a los siguientes criterios:

I.- Se tomará en cuenta la gravedad de la infracción y las condiciones del infractor;

II.- Cuando sean varios los responsables, cada uno será sancionado con el total de la multa que se imponga; y,

III.- Tratándose de reincidencia, se impondrá otra multa mayor o se duplicará la multa inmediata anterior que se hubiere impuesto, dentro de los límites señalados en el artículo 38.

Artículo 40

Las sanciones económicas que se impongan por infracciones a la presente ley, constituirán créditos fiscales a favor del erario estatal o municipal, según corresponda, que se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución, tendrán la prelación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables a la materia.

Artículo 41

No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causas de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa, o cualquier otra gestión efectuada por las mismas.

Artículo 42

En el procedimiento para la aplicación de las sanciones a que se refiere este capítulo se observarán las siguientes reglas:

I.- Se comunicarán por escrito al presunto infractor, los hechos constitutivos de la infracción, para que dentro del plazo de 10 días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;

II.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, se resolverá, considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y,

III.- La resolución fundada y motivada, se notificará por escrito al afectado.

Artículo 43

Los servidores públicos de las dependencias y entidades que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las normas que de ellas se deriven, deberán comunicarlo a las autoridades competentes.

Artículo 44

Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente ley, son independientes de las de orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.

Capítulo VIII

DEL RECURSO DE REVOCACIÓN

Artículo 45

Procederá el recurso de revocación contra:

- I.- Las resoluciones que dicten las dependencias, entidades, la Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo, la Contaduría General de Glosa en su caso, o el Comité en relación con las materias que le competen por disposición de esta ley; y,
- II.- Las resoluciones del Director General en el cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 46

El recurso de revocación se interpondrá por escrito ante la autoridad que haya emitido la resolución recurrida, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación o de aquel en que se haya tenido conocimiento del mismo.

Artículo 47

El escrito en el que se interponga el recurso de revocación deberá contener:

- I.- El nombre y domicilio del recurrente y, en su caso, de quien promueva en su nombre. Si fueron varios los recurrentes, el nombre y domicilio del representante común;
- II.- El interés jurídico que le asista;
- III.- La autoridad que haya dictado la resolución;
- IV.- La mención precisa de la resolución que motiva la interposición del recurso;
- V.- Los agravios que le cause la resolución recurrida;
- VI.- El ofrecimiento y aportación de pruebas; y,
- VII.- El lugar y fecha de la interposición del recurso.

Artículo 48

La autoridad al recibir el recurso, verificará si éste fue interpuesto en tiempo y forma, admitiéndolo o rechazándolo según proceda.

Admitido el recurso, desahogará las pruebas que procedan en un plazo que no excederá de quince días hábiles contados a partir de que surta efecto la notificación del proveído de admisión.

Artículo 49

Las pruebas aportadas dentro del escrito del recurso de revocación serán valoradas al dictar la resolución que corresponda, misma que podrá confirmar, modificar o revocar la resolución recurrida.

Dicha resolución se notificará al interesado personalmente o por correo certificado.

Artículo 50

En la substanciación y resolución del recurso en lo que no esté previsto en esta ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

TRANSITORIOS

Artículo Primero

Esta ley iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo

Se abroga la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 10 de abril de 1989, y se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Artículo Tercero

El Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento de esta ley.

Artículo Cuarto

En tanto se expida el Reglamento de esta ley, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de las dependencias y entidades competentes, podrá dictar las disposiciones administrativas tendientes al cumplimiento de la misma.

Artículo Quinto

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado dispondrá lo necesario para la asignación de recursos humanos y financieros que requiera el Comité, conforme a la reglamentación que se expida y disposiciones legales aplicables.

Artículo Sexto

El personal de base que al iniciar su vigencia la presente ley, preste sus servicios en la Oficialía Mayor y que tenga a su cargo la ejecución de las atribuciones en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, y prestaciones de servicios relacionados con éstos, pasará a formar parte de los recursos humanos del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, respetándose sus derechos laborales en los términos de la ley de la materia, y conforme a su régimen laboral.

El personal por honorarios que a la fecha preste sus servicios en la Oficialía Mayor y que tenga a su cargo la ejecución de las atribuciones en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, y prestación de servicios relacionados con los mismos, será considerado conforme a ley de la materia.

Artículo Séptimo

Corresponde a la Oficialía Mayor, a la Tesorería General, y a la Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo, ser responsables directos de la entrega recepción de los bienes muebles e inmuebles, recursos materiales y financieros, de la Oficialía Mayor de Gobierno al Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.

El Comité formulará y presentará a la Tesorería General del Estado, el proyecto de presupuesto que requerirá en el presente ejercicio, a fin de que ésta realice las transferencias correspondientes de la asignación presupuestaria autorizada a la Oficialía Mayor.

EL EJECUTIVO DEL ESTADO DISPONDRÁ SE PUBLIQUE Y OBSERVE.
PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO, A 28 DE MAYO
DE 1998. "AÑO DEL OCTOGESIMO ANIVERSARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN".

DIPUTADO PRESIDENTE.- FRANCISCO JOSE PEREZ PEREZ.- DIPUTADO SECRETARIO.-
VICTOR CORONA ALVA.- DIPUTADO SECRETARIO.- JAIME OSEGUERA HERRERA.-
(FIRMADOS).

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 60 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, Y PARA SU
DEBIDA PUBLICACIÓN Y OBSERVANCIA, PROMULGO EL PRESENTE DECRETO, EN LA
RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LOS 3
TRES DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 1998, MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- LIC. VICTOR
MANUEL TINOCO RUBI.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- LIC. ANTONIO GARCIA
TORRES.- (FIRMADOS).